



# La integridad electoral no es negociable<sup>(II)</sup>

TELÓN DE FONDO

## Edmundo Jacobó Molina

Exsecretario ejecutivo del Instituto  
Nacional Electoral (INE)

Opine usted:  
opinión@elfinanciero.com.mx



**S**eguimos con el análisis de la elección del próximo domingo a la luz de la **integridad electoral**, ese estándar imprescindible para evaluar no solo si un proceso es técnicamente válido, sino si es auténticamente democrático. Porque no basta con que haya urnas, boletas y conteos; se trata de examinar con rigor si el proceso cumple con los parámetros básicos de legalidad, equidad, transparencia, libertad y participación informada.

Acudir a las urnas supone el momento de mayor igualdad: un ciudadano, un voto. En esta ocasión no será el caso; habrá votos que tendrán mayor peso que otros en la conformación del Poder Judicial. El valor del voto dependerá del lugar en el que resida el elector, de manera tal que en algunos casos, como en la Ciudad de México, quienes acudan a votar tendrán la posibilidad de elegir a un mayor número de jueces y magistrados, aunque el área de competencia de los mismos vaya más allá de quien los eligió o incluso sea de carácter nacional. Esto rompe el principio básico de igualdad democrática y seguramente será referido ante tribunales internacionales.

Uno de los logros más importantes de la transición democrática mexicana fue la **ciudadanización** de las elec-

ciones. Es decir, se trataba de crear una institución autónoma, independiente del gobierno y los actores políticos, que organizara las contiendas y que además fueran los propios ciudadanos quienes instalaran las casillas, recibieran los votos de sus vecinos y los contaran, para con todo ello transparentar el proceso y darle credibilidad y legitimidad.

Este principio fundamental está siendo debilitado, por decir lo menos. El cómputo de votos no se hará en la casilla; ahí sólo se consignará el dato de participación. El conteo se hará en las oficinas de las autoridades electorales, en el INE tratándose de lo federal y en los OPLE para lo local. Recordemos que 19 estados tendrán también elecciones de sus juzgadores.

Los resultados se irán dando a conocer a lo largo de doce días y, además, no habrá conteo rápido, ni Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), incrementándose la incertidumbre y el que los diversos contendientes proclamen sus respectivas "victorias", con lo que no sólo habrá confusión, sino que además se alimentará la sospecha sobre la posibilidad de manipulación de los cómputos. Todo ello abonará a la incredulidad sobre los resultados y a la desconfianza en las autoridades electorales, cuestión

no menor, ya que llevó décadas construir su credibilidad y el reconocimiento social de las mismas.

Para rematar, en la casilla no se anularán las boletas no utilizadas, abriendo con ello la posibilidad de espacios para prácticas fraudulentas en siguientes elecciones.

Continuando con el recuento de condiciones sobre la calidad del ejercicio electoral, nos enfrentamos, en esta ocasión, a la politización de la figura de los observadores electorales. Esa figura que nació para evitar prácticas fraudulentas bajo el escrutinio ciudadano, hoy parece ser utilizada para incorporar "legalmente" en las casillas a personas que puedan vigilar quién acude a votar y con su presencia influir en el sentido del voto.

Lo anterior se sustenta en el hecho de que el INE recibió más de 316 mil solicitudes de personas que pretenden ser registradas como observadores electorales, cuando en la elección presidencial de 2024 apenas se alcanzaron los 35 mil. Hasta el momento, el 40% de las solicitudes revisadas han sido descartadas por tener vínculos con partidos políticos, lo cual está prohibido. Si esta tendencia se mantiene, habrá más de dos observadores por casilla, un dato sin precedentes. ¿Qué buscan estos "observadores"? ¿Vigilar el proceso o intimidar y controlar el voto ciudadano? El problema no es la participación ciudadana, sino la instrumentalización partidista de esta figura.

Ante la alta tasa de rechazo de participar como funcionario de casilla, aparece otra preocupación fundada: la posible sustitución masiva de funcionarios capacitados por personas tomadas directamente de la fila, sin entrenamiento o con filiación partidista. Si esto ocurre, se vulnerará la imparcialidad del proceso y se sembrarán dudas sobre los resultados.

Lo más preocupante de este breve recuento de procedimientos que ponen en duda la integridad electoral del ejercicio que tendrá verificativo el próximo domingo

es que con ello se podría estar preparando el terreno para una reforma electoral en la que estas prácticas indebidas sean la norma para futuras elecciones.

Lo que estamos viendo no es un fenómeno aislado. Esta elección forma parte de una estrategia más amplia para desmontar el entramado institucional que ha garantizado elecciones libres y justas en México desde 1997. Su objetivo: concentrar el poder político en el Ejecutivo, eliminando los contrapesos y debilitando la autonomía de los órganos autónomos, electorales y judiciales.

Lo que puede sobrevenir a todo esto es una reforma electoral que, además de desconocer la diversidad y pluralidad de la sociedad mexicana, desapareciendo los plurinominales en los Congresos federal y locales, busque institucionalizar esta lógica: elecciones baratas, controladas, manipulables y sin vigilancia efectiva.

La elección que se avecina debe entenderse como una alerta máxima para la democracia constitucional. No podemos permitir que se normalicen estas prácticas bajo el argumento de austeridad o simplificación. La elección judicial es el inicio de una transformación regresiva: de un régimen de garantías a uno de sumisión a un régimen autoritario.

Si algo nos enseña la historia de las democracias fallidas, es que el desmontaje institucional rara vez ocurre de golpe: se va destruyendo elección tras elección, reforma tras reforma, hasta que el régimen resultante ya no permite correcciones en el corto plazo con severas consecuencias para derechos y libertades. No podemos dejar de observar la próxima jornada y advertir sobre prácticas indebidas; aún estamos a tiempo de evitar que éstas se "normalicen". Cuidado, que la ventana se cierra rápido.

**POSDATA:** Sin duda, el populismo teme a la inteligencia y, para muestra, el ataque a las universidades en EU. Veámonos en ese espejo.